

Urbanistas también proponen que se cierren los sitios eriazos

“Que el Estado intervenga los más peligrosos”: piden frenar expansión de campamentos

CLAUDIO CERDA y JUAN PABLO GUZMÁN

Los gravísimos hechos delictivos registrados en campamentos a lo largo del país surgen hoy como uno de los principales desafíos en materia de seguridad, mientras estos asentamientos ilegales se extienden de norte a sur.

Iván Poduje, arquitecto y socio fundador de la oficina de urbanismo Atisba, advierte sobre la instalación de “megatomas” en los años recientes.

Esta transformación, dice, considera una “favelización” del campamento chileno, que comienza a operar como “ciudad informal”.

Ante ese escenario, según Poduje, “lo primero es detener el avance de las tomas, especialmente en sitios eriazos fiscales que deben cerrarse o destinarse a proyectos de vivienda urgentemente. Lo segundo es acelerar los planes de vivienda pública (...). Los privados también deben cercar sus terrenos eriazos, sobre todo en las comunas de mayor riesgo”.

A su vez, la organización Techo señala que el marco normativo actual no resulta suficiente para enfrentar la magnitud del problema habitacional, por lo que coincide en que se debe acelerar la construcción de viviendas sociales.

“La espera promedio para la entrega de proyectos de vivienda definitiva fluctúa entre cinco y quince años. Si a eso le sumamos las dificultades que tienen las familias en campamento para acceder a ellas, es imperativo ofrecer soluciones transitorias para el corto plazo”, comenta Isidora García, directora social de la entidad.

Para Sergio Baeriswyl, premio nacional de Urbanismo, en casos en que los traslados de campamentos no sean posibles, se debe asegurar un mayor control del Es-

Arquitectos e investigadores coinciden en que se debe tomar el control de aquellos sitios donde campea la delincuencia, junto con acelerar las soluciones habitacionales para miles de familias vulnerables.



El campamento Alto Molle, de Alto Hospicio no ha parado de crecer. Actualmente, es el más grande del país, con una superficie total de 129 hectáreas. Según un catastro de Atisba, tiene 4.686 viviendas, y viven más de 19 mil personas. La mayoría de ellos son extranjeros.

tado mediante medidas de habitabilidad y presencia permanente de instituciones que velen por la seguridad.

“Es importante entender que el surgimiento de los campamentos está empujado por un enorme déficit habitacional. No obstante, los campamentos son situaciones totalmente irregulares, sin planificación, sin respeto a las normas, leyes o reglamentos de urbanización. La política pública debiera evitar siempre su surgimiento y consolidación”, afirma.

“Una de las medidas a considerar por el Estado en forma urgente sería un programa de campamentos transitorios, donde existan condiciones de organización, diseño, servicios básicos y seguridad, entre otros. Esto ya se ha he-

cho en Chile con éxito. Por ejemplo, para la reconstrucción de 2010 las aldeas de emergencia lograron acoger a miles de familias en condiciones aceptables a la espera su vivienda”, dice Baeriswyl.

Abogan por erradicar los loteos irregulares

Mauricio Salgado, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), señala que el país tendrá hacer un esfuerzo enorme para erradicar los campamentos. “En esto Chile tiene una muy buena historia. Por ejemplo, entre 2001 y 2005, ogran reducir el número de campamentos a la mitad, de 981 a 453; y en esos cuatro años logramos sacar a 22 mil familias de ese tipo de asentamientos. Con las ci-

fras que tenemos hoy, con 113 mil hogares viviendo en campamentos, si repitiéramos esa hazaña, tardaríamos 20 años en erradicar completamente todos los campamentos, asumiendo que no aumente su número”.

Y en esa línea, añade que “para erradicar los campamentos en el corto plazo, se requiere un enfoque evidentemente multisectorial y que no solo se despliegue el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para intervenir estos asentamientos, especialmente en aquellos que son más peligrosos”. Además, dice, activar una intensiva labor de investigación y de inteligencia donde se hayan instalado bandas que lotean y comercializan terrenos.

“En los campamentos todos son vulnerables. Servicios como el agua, la luz y alcantarillado son muy deficitarios, si es que tienen acceso. La gente que vive en campamentos sabe cuáles son sus problemas y la delincuencia ha llegado con una especie de zanañoría a darles soluciones; entonces, malamente les sirve. Todo eso se puede erradicar”, analiza Beatriz Buccicardi, presidenta del Colegio de Arquitectos.

Luis Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC, expone que ante el panorama actual de los campamentos se necesita un rol

mucho más activo del Estado. “No solamente en la producción de la vivienda o de entregar soluciones a la familia, sino que también tener control por parte del Estado de estos loteos irregulares”.

“Estos campamentos o loteos irregulares no pueden transformarse en un sitio donde es la ley del más fuerte; sino que es fundamental que haya

presencia del Estado al interior de esos lugares. No solamente en términos de seguridad, que es lo básico, sino que también de servicio urbano, que incluya empezar a catastrar y conocer esos lugares”, sentencia.

TECHO
Según datos de esta organización, 113 mil familias habitaban en campamentos entre 2022 y 2023.

